



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

PROCESO: EJECUTIVO LABORAL - FACTURAS.

DEMANDANTE: CARDIO SUR BARRANQUILLA LTDA.

DEMANDADO: EMMANUEL NAVARRO IPS SAS

RADICADO: 08-001-05-013-2024-00082-00.

INFORME SECRETARIAL. Señor Juez, a su Despacho la presente demanda digital ordinaria informándole que por reparto de la Oficina Judicial correspondió a este Juzgado, la cual se encuentra radicada. También, le comunico que el expediente se encuentra digitalizado y con sus respectivas anotaciones en TYBA para su trámite. A su despacho para resolver.

Barranquilla, 22 de abril de 2024.

MARIA B. POTES SANTODOMINGO.
Secretaria

JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA. Barranquilla, veintidós (22) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

Teniendo en cuenta el anterior informe secretarial observa el Despacho que la demandante, **CARDIO SUR BARRANQUILLA LTDA**, presenta demanda ejecutiva contra la entidad demandada **EMMANUEL NAVARRO IPS SAS**, y esboza como pretensiones se libre mandamiento de pago por la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (\$39.409.484)**, además, solicita se condene al pago de intereses de mora a la tasa máxima, y costas del proceso.

Fundamenta sus pretensiones en que elaboró y envió a la demandada diferentes facturas cambiarias, las cuales fueron recibidas por esta última, que el plazo de todas las facturas se encuentra vencido sin que hubieran pagado la obligación, a pesar de los diferentes requerimientos que le hizo para ello, e igualmente, aduce que la obligación es clara, expresa y exigible.

De lo anterior, es de advertir que se pretende ejecutar una obligación contenida en unas facturas por concepto de servicios médicos prestados soportada en una relación o convenio comercial, e incluso no hay evidencia de que correspondan a una relación de trabajo o del sistema de seguridad social integral que no corresponda a otra autoridad, pues corresponde a cobros realizados a **EMMANUEL NAVARRO IPS SAS**.-

En efecto, revisado el expediente, vislumbra el Juzgado que evidentemente la justicia laboral no es la competente para conocer del presente asunto. Nótese que el numeral 4º del artículo 2º del CPTSS, modificado por el artículo 622 del CGP, dispone que la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social conoce entre otros asuntos, de “Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos. *(Negrillas y subrayas fuera del texto original)*.

Con arreglo a esta norma la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en asuntos como el que nos ocupa con antelación había sido del criterio que la competencia radicaba en la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social, el cual fue recogido en providencia **APL2642-2017**, del 23 de marzo de 2017 proferida en el expediente **110010230000201600178-00**, por medio de la cual resolvió un conflicto de competencia, atribuyéndola a la especialidad civil, al decir que:



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

1. *“Hasta la presente fecha, en asuntos similares la Corporación atribuyó la competencia de «[l]a ejecución de obligaciones emanadas (...) del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad», a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social, a partir del artículo 2º, numeral 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en concordancia con el artículo 100 ibídem.*

2. *Sin embargo, un nuevo análisis de la situación que plantea el conflicto que ahora reclama la atención de la Corte, hace necesario recoger dicha tesis y, en lo sucesivo, adjudicar el conocimiento de demandas ejecutivas como la que originó este debate, a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, teniendo en cuenta las razones que a continuación se exponen.*

3. *Es cierto que uno de los principales logros de la Ley 100 de 1993 fue el de unificar en un solo estatuto el sistema de seguridad social integral, al tiempo que la Ley 712 de 2001 le asignó a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, el conocimiento de las controversias surgidas en razón del funcionamiento de tal sistema, como así lo prevé el artículo 2º, numeral 4º, cuyo texto señala que es atribución de aquella:*

(...)

4.- *Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.*

(...).

Ocorre sin embargo que dicho sistema puede dar lugar a varios tipos de relaciones jurídicas, autónomas e independientes, aunque conectadas entre sí.

La primera, estrictamente de seguridad social, entre los afiliados o beneficiarios del sistema y las entidades administradoras o prestadoras (EPS, IPS, ARL), en lo que tiene que ver con la asistencia y atención en salud que aquellos requieran.

La segunda, de raigambre netamente civil o comercial, producto de la forma contractual o extracontractual como dichas entidades se obligan a prestar el servicio a los afiliados o beneficiarios del sistema, en virtud de lo cual se utilizan instrumentos garantes de la satisfacción de esas obligaciones, tales como facturas o cualquier otro título valor de contenido crediticio, el cual valdrá como pago de aquellas en orden a lo dispuesto en el artículo 882 del Código de Comercio.

*Así las cosas, es evidente que como la obligación cuyo cumplimiento aquí se demanda corresponde a este último tipo de relación, pues surgió entre la Entidad Promotora de Salud Cafesalud S.A., y la Prestadora del servicio Hospital Universitario de Bucaramanga, **la cual se garantizó con un título valor (factura), de contenido eminentemente comercial, la competencia para conocer de la demanda ejecutiva, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, radica en la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil.**” (Negrillas y subrayas fuera del texto original).*

Ese criterio, fue reiterado por la misma Corporación en los autos APL3326-2017, del 25/05/17, APL4982-2017, APL4980-2017, APL4981-2017, todos del 03/08/17, de los ponentes Eyder Patiño Cabrera, Patricia Salazar Cuéllar, José Francisco Acuña Vizcaya y Gerardo Botero Zuluaga, y con similar salvamento de voto, con lo que ninguna razón habría para sustraerse a él, permite concluir, sin lugar a mayores elucubraciones, que esa judicatura se inclinó por asignar la competencia de estos precisos asuntos a la especialidad civil, recalcando la naturaleza de los mismos, que no es otra que el cobro ejecutivo de un crédito contenido en unos títulos ejecutivos, facturas en este caso.

Y en fecha más reciente, esta Postura fue reiterada en providencia APL851 del 22 de febrero

Calle 40 NO. 44-39. Piso 4. Edificio Telecom.

Telefax: 3885156 / 3885005 EXT. 2030. www.ramajudicial.gov.co

Barranquilla – Atlántico. Colombia

Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co



No. SC5780 - 4



No. GP 059 - 4



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

de 2018, proferida en el proceso radicado bajo el número 110010230000201701127-01, con ponencia del Doctor Gerardo Botero Zuluaga, así como en providencia APL2594-2022, Rad. 110010230000202200396-00, con ponencia del mismo Magistrado.

Así las cosas, se declarará la falta de competencia para dirimir el presente asunto, debiéndose rechazar la demanda, y ordenar remitir el expediente a los Jueces Civiles Municipales o Municipales de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la ciudad Barranquilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del C.G.P., aplicable por integración normativa en materia laboral por disposición del artículo 145 del C.P.T.S.S., para lo de su competencia.

En mérito de lo expuesto el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la falta de competencia para conocer de la presente demanda ejecutiva, y por ende, se **RECHAZA** la misma, por las razones antes expuestas. En consecuencia, por Secretaría, **REMÍTASE** el expediente para que sea repartido entre los Jueces Civiles Municipales o Municipales de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la ciudad de Barranquilla, para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

EL JUEZ,


JOSE IGNACIO GALVAN PRADA
E-2024-00082-00

Juzgado 13 Laboral Del Circuito de Barranquilla
Día 24 Mes 04 Año 2024
Notificado por el Estado N° 067
La Providencia de fecha Día 22 Mes 04 Año 2024
La Secretaria María B Potes Santodomingo